

Terrorismo de estado y Tratado de Libre Comercio: estrategia imperialista en Colombia

Lilia Solano*

Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales de América Latina y el Caribe de la red CLACSO
<http://www.clacso.org.ar/biblioteca> - biblioteca@clacso.edu.ar

* *Politóloga
y docente
universitaria.
Directora
del Proyecto
"Justicia y Vida",
Colombia*

Quien no está a favor nuestro, está en contra nuestra

George Bush Jr.

Por su localización geo-estratégica, Colombia representa para Estados Unidos un enclave fundamental para la circulación y distribución de sus mercancías y para su estrategia de guerra en el continente americano. Como ejemplo de esta larga historia de imposición de los intereses estadounidenses en Colombia, recordemos que hace ya más de cien años, EE.UU. forzó la separación de Panamá para la construcción del canal con lo cual logró controlar uno de los puntos estratégicos para la guerra y el comercio mundial. Una zona neurálgica entre dos mares, con una selva riquísima, y el canal interoceánico.

Para lograr la imposición de sus intereses, Estados Unidos utiliza no sólo su poderío militar sino también al terrorismo como un arma de guerra, un arma feroz porque el terror es muy eficaz para destrozarse los lazos de solidaridad

y resistencia de las víctimas y crear las formas más brutales de subordinación entre ellas y los victimarios. La afirmación de que la estrategia del terrorismo de Estado se ha apoderado de la guerra para asegurar los intereses norteamericanos tiene igualmente una larga y sangrienta historia en Colombia que incluye el apoyo de EE.UU. al terrorismo de Estado ejercido por diferentes gobiernos colombianos desde hace ya más de cien años; actos de terror para imponer otro terror y que justifican crímenes atroces que nunca fueron castigados y han quedado impunes.

En esta perspectiva, el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y los Tratados de Libre Comercio (TLC) pretenden aumentar el poderío económico de Estados Unidos en todo el continente garantizando un mercado ampliado para sus mercancías, penetrando los mercados nacionales con prebendas para sus productos y anulando la producción local, con consecuencias devastadoras para la región que ha sido desangrada ya en el pasado por el colonialismo europeo. Para el logro de este objetivo la infraestructura vial resulta fundamental. En este camino y junto con el Plan Puebla Panamá (PPP) también las carreteras y vías fluviales colombianas son de gran interés para el capital estadounidense que persigue la realización de megaproyectos de conexión en infraestructura de gigantescas dimensiones que atraviesan todo el sur del continente, empezando por las carreteras y ríos colombianos. Así, el PPP plantea el desarrollo de una obra vial con el objetivo de transformar a Centroamérica en una autopista de bienes y servicios provenientes de Estados Unidos. Aunado a ello, en el caso colombiano, carreteras como la Panamericana, los puertos marítimos del pacífico como Buenaventura y Tumaco, el canal fluvial del río Atrato y la salida al Océano Atlántico por el río Amazonas constituyen soluciones de transporte necesarias para los proyectos de estas grandes empresas, que deben ser asegurados con todo un aparato militar y una política de seguridad al servicio de sus intereses.

Por otra parte, en relación a los minerales y piedras preciosas, Colombia se perfila como un país con grandes

“Así, el PPP plantea el desarrollo de una obra vial con el objetivo de transformar a Centroamérica en una autopista de bienes y servicios provenientes de Estados Unidos”

riquezas en el subsuelo, lo que ha llevado a grandes empresas transnacionales a fijar sus intereses en este territorio. El capital del norte ha estado mayoritariamente presente en dicha explotación, y por consiguiente también su presencia militar que facilita en gran medida el adiestramiento y la logística de las fuerzas armadas colombianas entrenadas para eliminar a los actores sociales que se encuentran en los territorios donde se desarrollan estos megaproyectos. Finalmente vale señalar que, en tanto América del Sur contiene cerca del 47% de los recursos hídricos del planeta, sólo en la amazonía colombiana se concentra el 20% de dicho recurso. Sus corrientes de agua pueden convertirse en la mayor fuente de proteínas de alta calidad y bajo costo, en ellas viven más de dos mil especies de peces que podrían ser explotadas. Todo ello además de la importancia que revisten actualmente las exportaciones petroleras, gasíferas, de carbón, de oro y de plata.

El despliegue militar de Estados Unidos en territorio colombiano

El Plan Colombia, hoy convertido en el Plan Patriota, es un plan de terrorismo de Estado y de modernización capitalista neoliberal con el fin de expropiar a las comunidades originarias de Colombia. En Argentina sucedió algo similar con la implementación de la Campaña del Desierto, una verdadera operación de limpieza étnica a finales del siglo XIX. En el mismo sentido, este plan resulta la variante terrorista del desarrollo capitalista que requiere la destrucción física de los sujetos sociales que se enfrentan al destino civilizador planeado para ellos. Es el proyecto militar necesario para implementar la política económica y los megaproyectos señalados anteriormente; surgido, en sus orígenes, bajo el pretexto de acabar con los cultivos de uso ilícito, en especial de la hoja de coca, y su posterior procesamiento.

Vale recordar que en Colombia el cultivo y la producción de marihuana para consumo masivo fueron impulsados por miembros de los denominados Cuerpos de Paz que llegaron a América Latina bajo la denominada Alianza para el Progreso y cuando la explotación de estos cultivos en los años setenta estaba en todo su esplendor. A partir de entonces empiezan a surgir los carteles de la droga con la complacencia del Estado colombiano, a tal punto que el Banco de la República abre las denominadas ventanillas siniestras –por ejemplo en Santa Marta– para comprar los dólares producto de los negocios ilícitos. Posteriormente se inicia el negocio del procesamiento de la base de coca proveniente de Bolivia y Perú; y Colombia pasa a ser el primer productor de cocaína, con una creciente actividad que pretende suplir las insaciables demandas de más de cuarenta millones de consumidores permanentes en Estados Unidos. Asimismo, la marihuana pasa a un segundo plano porque es cultivada por agricultores en EE.UU. y su producción, consumo y comercialización es despenalizado en varios Estados de dicho país.



© Patricio Realpe

Diferentes organismos, entre ellos el Grupo de Acción Financiera (GAFI), han señalado que las ganancias por este jugoso negocio a comienzos de los años noventa eran de más de un trillón de dólares, siendo que del valor total de la producción y comercialización sólo le restaba a los productores el 1% mientras que la parte más significativa de la ganancia quedaba en manos de los lavadores de los activos, es decir, del sistema financiero internacional. En este sentido vale recordar que el narcotráfico es una actividad con una pluralidad de demandas que requiere no sólo la tierra para el cultivo y los productores –sean colombianos, bolivianos, peruanos u otros– sino también de aquellos que se dedican al negocio de los precursores químicos, el tráfico de armas y el lavado de dinero, en tanto que en cada una de esas etapas resulta ser el sistema financiero el más beneficiado.

En la década del ochenta narcotraficantes y paramilitares comienzan a construir una alianza en razón de la necesidad de garantizar la protección y consolidación de este negocio. En regiones como el Magdalena Medio, el paramilitarismo fue creación del Ejército Nacional –desde la Quinta Brigada– contando con el apoyo de políticos, terratenientes, comerciantes y ganaderos, entre otros. Asimismo, los jefes de los grupos paramilitares han afirmado en repetidas ocasiones su respeto por la propiedad privada, las inversiones extranjeras y la economía nacional.

Por otra parte, los indígenas han cultivado la hoja de coca por sus propiedades medicinales, y ella es parte de su cultura. Sin embargo, campesinos e indígenas reconocen los efectos nocivos en Occidente de su mercantilización, por lo que han planteado la susti-

tución de estos cultivos de coca y amapola por productos alimenticios que les permitan acceder a una vida digna. Pero los diferentes gobiernos norteamericanos y colombianos han transformado el problema agrario en un problema de orden público, de enemigos internos a los que se debe combatir, convirtiendo la cuestión agraria en un tema de narcotráfico. En esta trasmutación los campesinos en vez de protestar contra los terratenientes tienen que defenderse de las fumigaciones y del Estado, así como este –y el establishment– dejó prosperar por muchos años los cultivos de uso ilícito pues, al fin de cuentas, evitaban la reforma agraria y la lucha por la tierra.

Como la insurgencia comenzó a participar del negocio para su propia financiación y consolidación de sus posiciones; el gobierno norteamericano, con total apoyo y obediencia de nuestros gobernantes y hablando a nombre de la humanidad, decidió que la coca era el enemigo y le declararon la guerra a los cultivos de uso ilícito por ser fuente de los recursos de la guerrilla. Entonces los terratenientes, economistas, políticos y militares señalaron a los campesinos como los autores del modelo y aceptaron que para favorecer la seguridad interna norteamericana y en nombre de la libertad, tenían que sacrificar la estabilidad que habían alcanzado sus negocios y unirse a la cruzada contra los cultivos. El problema de la tierra, de su distribución y aprovechamiento lleva más de un siglo siendo evadido o resuelto por la fuerza, mientras tanto los movimientos sociales y la insurgencia ya no luchan sólo por una reforma agraria sino por una reestructuración de las bases del conjunto del sistema político. Pero la tierra sigue estando en el centro del problema con su secuela de campesinos asesinados, desplazados, torturados y fumigados; mientras el país –como resultado de esta estrategia y con la complicidad de los medios masivos de comunicación– señala a las víctimas y apoya a los victimarios.

El texto original del Plan Colombia, elaborado en Estados Unidos, planteaba su ejecución inicialmente en Colombia pues se trataba de un plan contrainsurgente orientado a acabar con una guerrilla que no permitiría el avance de los planes económicos proyectados para el territorio amazónico. La aprobación final del Plan –enero de 2000– se dio en medio del proceso de diálogo entre el gobierno de Andrés Pastrana y la guerrilla de las FARC, lo que significó el fin de estas negociaciones. Por otra parte, el Plan Patriota trasciende el marco del proyecto contrainsurgente para Colombia –que indudablemente también lo es– ampliando su radio de acción a la región Andina. Y aunque los contenidos estructurales del Plan sigan aplicándose –las fumigaciones y las operaciones militares– su política externa ha sobrepasado los límites de lo nacional y se ha consolidado como una estrategia de carácter global articulada con los objetivos geopolíticos de Estados Unidos para América del Sur. En esta dirección el Plan Patriota pretende narcotizar la agenda nacional y regional andina, y se convierte en la justificación perfecta para profundizar los mecanismos desenfrenados del mercado globalizado y del control militar. Se constituye en un plan orientado a criminalizar la protesta que rechaza la exclusión

social y la total destrucción del Estado social, cada vez más subordinado a los intereses norteamericanos. En este sentido, el Plan Patriota plantea que la democracia está bajo ataque en los Andes, y en uno de los documentos del Departamento de Estado se presenta, por ejemplo, a los indígenas ecuatorianos como populistas radicales y, por tanto, factores de inestabilidad democrática. En la misma dirección el documento de evaluación de Plan Patriota del Departamento de Estado de EE.UU. afirma que “la capacidad de las Fuerzas Armadas andinas para controlar sus fronteras, respaldar los esfuerzos antidrogas y apoyar las instituciones democráticas, ha declinado [...] Se debe mejorar la capacidad militar de acción regional combinada”. Esto indica la intención de promover más militarización y presencia de tropas norteamericanas en la región, y señala cuáles son los argumentos que se utilizan para justificar la ocupación de nuestros territorios.

Planteado inicialmente como un programa a tres años, el Plan Colombia contaba con un presupuesto de 7.500 millones de dólares, al cual Colombia aportaba 4.500 millones y, en los dos años siguientes, la contribución de EE.UU. alcanzaría a 1.300 millones. En su lanzamiento el presidente Clinton resaltaba que el 75% del Plan era de naturaleza social y política pero no militar. Sin embargo, esta asignación proveniente de Estados Unidos se tradujo en: helicópteros artillados y entrenamiento para batallones antidroga del ejército colombiano (403,7 millones de dólares); interdicción de drogas, mejora de las instalaciones de radar, fuerza aérea y pistas de aterrizaje (113 millones); desarrollo de alternativas al cultivo y trasiego de drogas (58,5 millones); ayuda para desplazados (47,5 millones); derechos humanos (53,5 millones); administración de justicia (65,5 millones); proceso de paz (3 millones); fondos para agencias del gobierno estadounidense, como servicio de aduanas, entre otros (132,3 millones); financiamiento para bases militares en Ecuador, Aruba y Curaçao (116 millones); ayuda para programas antinarcóticos e interdicción en los países andinos (55 millones); helicópteros KMAX para países andinos (32 millones); programas de desarrollo económico alternativo (93 millones). Si sumamos las partidas referidas resulta claro que entre el 75 y 80% del total del presupuesto previsto es parte del proyecto de terrorismo del norte.

El Plan establecía tres fases de acciones represivas: fase 1: esfuerzo judicial, policial y militar de rango bajo apuntado al Putumayo y al Sur; fase 2: esfuerzo judicial, policial, social y militar de rango medio apuntado al sureste y a las partes centrales del país, durante dos a tres años; y fase 3: extender los esfuerzos integrados a lo largo del país —entre tres y seis años— siendo las prioridades para las fuerzas militares los grupos insurgentes, grupos paramilitares, el tráfico de drogas y las organizaciones criminales. Dirigido con el apoyo del Comando de las Fuerzas de Tareas Conjuntas del Sur —que dispone de 12.500 hombres armados y cuenta con un equipo militar de 800 millones de dólares bajo las órdenes de guerra del Comando Sur— su esfuerzo en el combate al narcotráfico parece demostrarse inocuo. Según estadísticas recientemente publicadas sobre la evolu-

“Esta estrategia de guerra se desarrolla en el marco de la llamada Estrategia de Seguridad Nacional donde se promueven acciones preventivas y de confrontación y represión a todo grupo o acción que sea considerado bajo el acápite de terrorismo”

ción de los cultivos de coca, estos han tenido un aumento considerable en Colombia cubriendo ya 250 mil nuevas hectáreas, mientras que cuando empezó el Plan la superficie era de sólo 140 mil hectáreas.

Las operaciones del Plan Colombia, previo al Plan Patriota y diseñado en Washington, se iniciaron con la operación *Aniquilador 2* en el parque natural de Sumapaz en el departamento de Cundinamarca, una región que históricamente ha sido escenario de fuerte organización y movilización campesina. Esta región fue declarada inmediatamente zona de operaciones militares. Este señalamiento es simplemente un ejemplo de la naturaleza de este plan que orienta su ofensiva contra los movimientos sociales con la justificación de combatir la insurgencia y el narcotráfico. Los informes de violaciones a los derechos humanos indican que los homicidios, desapariciones, torturas y asesinatos han aumentado a gran escala, sobre todo a partir del gobierno de Álvaro Uribe. Y aunque las estadísticas de los organismos estatales no lo registren, las organizaciones sociales y de derechos humanos permanentemente denuncian que muchos de los supuestos guerrilleros abatidos en combate, eran campesinos oriundos de las regiones afectadas. Asimismo, aumenta la connivencia entre paramilitares y militares colombianos siendo que incluso en algunas regiones son los mismos, que simplemente cambian de uniforme. También denuncias de los pobladores indican que hay operativos conjuntos, donde patrullan militares, paramilitares y personal militar norteamericano.

Esta estrategia de guerra se desarrolla en el marco de la llamada Estrategia de Seguridad Nacional donde se promueven acciones preventivas y de confrontación y represión a todo grupo o acción que sea considerado bajo el acápite de terrorismo. Utilizando el modelo de intervención militar desarrollado en Vietnam y con el asesoramiento y supervisión de los comandantes del Southcom (Comando Sur de las Fuerzas Armadas de EE.UU.), esta estrategia afecta particularmente a la población civil, viola

la soberanía nacional y pone al Estado a girar en torno a la militarización, colocando como objetivo de la persecución a los pobres y convirtiendo en delito todas las resistencias y en delincuentes a quienes se oponen a las políticas neoliberales.

Después de una guerra de ya más de cuatro décadas, los repetidos esfuerzos por la paz negociada han fracasado por la ausencia de reformas estructurales y por el predominio del militarismo y el proyecto imperial sobre el país. El gobierno de Uribe, autoritario y de corte fascista, ha pretendido desmontar los desarrollos democráticos obtenidos en la Constitución de 1991 y conducir el país a una mayor militarización de la población con el llamado “estatuto antiterrorista”. Por otra parte, el pueblo colombiano ha dicho no a la contrarreforma constitucional, a la propuesta de Uribe de obtener poderes supra-constitucionales, al pago del FMI y a la privatización de las pocas empresas nacionales que quedan. Asimismo el surgimiento del Polo Democrático Alternativo puede resultar en un movimiento político que se levante como una alternativa de poder ante el control hegemónico tradicional.

El presidente Uribe está empeñado en asfixiar los derechos civiles y políticos de la sociedad en general y legalizar la larga impunidad de los paramilitares adelantando un esfuerzo por consolidar en términos políticos y jurídicos la inmunidad del robo y el asesinato. A este esfuerzo a nivel nacional, se suma el compromiso hecho por su administración de sacar adelante el TLC con EE.UU., el ALCA y los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

Las organizaciones sociales y las diferentes expresiones de resistencia en Colombia no están dispuestas a permitir que la catástrofe continúe, y por eso han seguido luchando con el fin de deslegitimar el actual régimen económico y denunciar la complicidad del terrorismo de Estado con los intereses norteamericanos. La lucha prosigue para que la política cumpla con el precepto constitucional de un manejo social y ecológico de la economía. Los diferentes sectores sociales que hacen parte de las diferentes formas de resistencia –entre los que juegan un papel muy importante los sectores campesinos, indígenas, afrocolombianos, obreros, estudiantes, ambientalistas y las mujeres– siguen batallando a pesar de un contexto de fuerte criminalización de la protesta social y donde estos movimientos son señalados como los enemigos a ser destruidos; como si se quisiera recrear a Maquiavelo cuando aconsejaba al príncipe diciéndole que cuando tuviera la oportunidad debía “procurarse con astucia alguna enemistad para que, venciendo, resulte mayor su grandeza”.